Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Número 232

SABADO 28 DE SEPTIEMBRE DE 1946

Franques concertada

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

EN CÓRDOBA	Plas.	FUERA DE CÓRDOBA	Plas.
Trimestre. . . .	18	Trimestre. . . .	21
Seis meses. . . .	30	Seis meses. . . .	36
Un año.	54	Un año.	66
Venta de número suelto del año corriente . . . 0'50 pts.			
Id. de id. id. del id. anterior. . . 1'00 »			
Id. de id. id. de dos años anteriores. 1'50 »			
Id. id. de los años anteriores a los dos últimos. 2'00 »			

PAGO ADELANTADO

Las Corporaciones provinciales y municipales vienen obligadas al pago de todos los anuncios de subasta que manden publicar, aún cuando aquéllas resulten desiertas por falta de rematante. Reales Ordenes de 18 de Marzo de 1904 y 7 de Febrero de 1906.
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS, EXCEPTO LOS DOMINGOS

Reglamento de 2 de Julio de 1924.

Artículo 20.—Las entidades municipales abonarán, en primer término, al Notario que, en su caso, autorice la subasta, los derechos que le correspondan y los suplementos que haya adelantado, y abonarán igualmente los derechos de inserción de los anuncios en los periódicos, cuidando de reintegrarse del rematante, si lo hubiere, del importe total de estos gastos con arreglo a lo dispuesto en la regla octava del artículo 6.º de este Reglamento.

ADVERTENCIA.—No se insertará ningún edicto o anuncio que sea a instancia de parte sin que abonen los interesados el importe de su publicación o garanticen el pago a razón de 2 pesetas línea o parte de ella.

Artículo 1.º—Las Leyes obligarán en la Península, o las adyacentes, Canarias y territorios de Africa sujetos a la Legislación peninsular, a los veinte días de su promulgación, si en ellas no se dispusiere otra cosa.

Se entiende hecha la promulgación el día en que termina la inserción de la Ley en el «Boletín Oficial del Estado».

Artículo 2.º—La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento.

Artículo 3.º—Las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario.—(Código civil vigente).

Las leyes, órdenes y anuncios que se mande publicar en los BOLETINES OFICIALES se han de remitir al Gobernador de la provincia, por cuyo conducto se pasarán a los editores de los mencionados periódicos.

(RR. OO. 26 de Marzo de 1837 y 31 de Agosto 1863).

Boletín Oficial del Estado

correspondiente al día 21 de Septiembre de 1946

AÑO XI NUM. 264

Núm. 5.635

Gobierno de la Nación

MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO-LEY de 30 de agosto de 1946 por el que se establecen nuevas normas legales y procesales para la represión de los delitos contra el régimen legal de abastecimientos.

En la serie de medidas de muy diverso alcance con que el Gobierno afronta el problema del abaratamiento de la vida no pueden faltar las de carácter penal contra la demasia de traficantes sin conciencia, públicos enemigos de la paz social, que merecen ser castigados con la energía y rapidez que condicionan el éxito de las normas de tipo punitivo.

Para el logro de esa finalidad, sin suprimir organizaciones administrativas de las que no pueden prescindirse mientras subsistan las circunstancias que determinaron su creación y aprovechando su experiencia en la investigación de aquellas infracciones, conviene delimitar las funciones de las organizaciones aludidas y de los Tribunales de Justicia, conceder a estos poderes discrecionales en la aplicación de las penas, y dotarles de un procedimiento rápido, adecuado al carácter correccional de las sanciones previstas y que, sin olvidar las exigencias de la defensa, impida el tortuoso juego de la mala fe, de manera que una actuación judicial serena, pero rápida y eficiente frustre las maquinaciones de los que en la lentitud del proceso encuentran recursos para desprestigiarlo o expediente para demorar el merecido castigo.

En su virtud, previa la deliberación del Consejo de Ministros, y a propuesta del de Justicia.

DISPONGO: CAPITULO PRIMERO De los delitos contra el régimen legal de abastecimientos y sus penas

Artículo primero.—Son delitos contra el régimen local de abastecimientos, además de los comprendidos en la Ley de veintiseis de octubre de mil novecientos treinta y nueve, los definidos en el presente Decreto-Ley.

Artículo segundo.—Cualquier desobediencia, incumplimiento, irregularidad o negligencia en la ejecución de Ordenes o disposiciones ministeriales o de las instrucciones que dicte la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes en materia de producción, cambio, circulación o consumo de mercancías será castigada con la pena de arresto mayor a prisión menor.

Artículo tercero.—En la aplicación de las penas establecidas en el artículo anterior los Tribunales procederán según su prudente arbitrio teniendo en cuenta las circunstancias de la infracción y las personales del inculpado.

Artículo cuarto.—Si los delitos comprendidos en este Decreto-Ley fuesen cometidos por personas adscritas a cualquier organismo al que oficialmente esté encomendada alguna misión relacionada con el régimen legal de abastecimientos, se impondrá la pena en su grado máximo.

Cuando se cometieren por una persona colectiva, se presumirán responsables, salvo prueba en contrario, las personas que constituyan el organo que conforme a los Estatutos asuma la representación de la entidad, aunque la misma hubiere sido delegada.

Artículo quinto.—Las penas establecidas para los delitos contra el régimen legal de abastecimientos son independientes de las medidas y correcciones que impongan los Gobernadores Civiles, Fiscal Superior de Tasas o el Gobierno en su caso, conforme a la Ley de treinta de sep-

tiembre de mil novecientos cuarenta y disposiciones complementarias en relación con el Decreto de veinte de julio de mil novecientos cuarenta y seis excepto la sanción comprendida en el apartado d) del artículo cuarto de la referida Ley, que únicamente se mantiene como subsidiaria para el caso previsto en el artículo séptimo de la misma.

Artículo sexto.—Para el cumplimiento de las penas de multa, inhabilitación para ejercer el comercio y cierre de establecimientos, que imponga la Autoridad judicial a tenor de la Ley de veintiseis de octubre de mil novecientos treinta y nueve serán de abono las sanciones de índole análogas que conforme al artículo anterior se impusieren gubernativamente, y viceversa.

Artículo séptimo.—La Autoridad judicial dará a las multas y a los géneros y mercancías decomisados el destino señalado por el artículo séptimo de la Ley de treinta de septiembre de mil novecientos cuarenta.

Artículo octavo.—Los condenados por delitos contra el régimen legal de abastecimientos no podrán disfrutar de los beneficios de condena y libertad condicionales, ni de los de redención de penas por el trabajo.

CAPITULO II Del procedimiento

Artículo noveno.—La jurisdicción ordinaria será la única competente para sustanciar las actuaciones que se promuevan con el fin de castigar los delitos previstos en este Decreto-Ley.

Artículo décimo.—La acción para la persecución de los delitos comprendidos en la Ley de veintiseis de octubre de mil novecientos treinta y nueve será pública. Respecto de los definidos en el artículo segundo de este Decreto-Ley solo se procederá a requerimiento de la Fiscalía Superior de Tasas y mediante remisión por la misma del oportuno tanto de culpa al Juzgado competente.

Artículo undécimo.—Las causas incoadas por los delitos a que se re-

fieren los artículos primero y segundo de la Ley de veintiseis de Octubre de mil novecientos treinta y nueve, se sustanciarán por los trámites del procedimiento ordinario previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Artículo duodécimo.—Las causas referentes a los demás delitos contra el régimen legal de abastecimientos se tramitarán por el procedimiento sumario que se establece en los artículos siguientes.

Artículo decimotercero.—A) Los Jueces de Instrucción del lugar donde los hechos delictivos se hubiesen realizado conocerán en primera instancia de la instrucción y fallo de las causas de que trata el artículo anterior, estándoles también confiada la ejecución de la sentencia.

Las Audiencias Provinciales respectivas entenderán en los recursos expresamente autorizados por este Decreto-Ley, contra las resoluciones que aquellos dicten.

Cuando no conste el lugar de comisión de los hechos, la competencia se determinará teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo quince de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Si el número de asuntos lo exigiese, el Ministro de Justicia podrá designar, en determinadas localidades, Magistrados o Jueces que asuman exclusivamente la jurisdicción para conocer de los delitos a que este Decreto-Ley se refiere, sin perjuicio de las facultades que las Leyes y disposiciones orgánicas confieren para la designación de Jueces especiales en los casos en ellas prevenidos.

B) Iniciadas las actuaciones, el Juez de Instrucción dictará acuerdo de proceder o se abstendrá de adoptarlo por resolución fundada, si los hechos que se le denuncien no fuesen constitutivos de delito. Contra una u otra resolución no se dará recurso alguno.

En el primer caso, resolverá sobre la situación personal del inculpado y le recibirá inmediata declaración sobre los hechos fundamentales que hubieren motivado la incoación de

procedimiento. Dentro de los dos días siguientes podrá presentar aquél por sí o por su representante, escrito de descargo acompañando al mismo, o proponiendo en su caso, las pruebas que a la defensa de su derecho convenga.

C) Cumplido este trámite, el Juzgado comunicará los autos al Ministerio Fiscal para que también en plazo de dos días propongan por su parte las pruebas de que intente valerse o manifieste que no estima necesarias ninguna por el total esclarecimiento de los hechos.

D) Inmediatamente y previa declaración de pertinencia y utilidad, el Juez acordará lo necesario para que, a su presencia, se practiquen las pruebas en plazo que, normalmente, no excederá de cinco días, y que, excepcionalmente, podrá prorrogarse por cinco más.

No serán recurribles los autos en que el Juzgado califique la pertinencia y utilidad de las pruebas y resuelva sobre su admisión.

E) Practicadas las pruebas se pondrá de manifiesto las actuaciones al Ministerio Fiscal, el cual formulará, en el plazo de dos días, un sucinto escrito de calificación en que, con sujeción a lo alegado y probado, relatará los hechos y circunstancias en ellos concurrentes, determinando las personas que reputa responsables y el concepto en que lo sean, y solicitará la imposición de la pena que estime adecuada. En este mismo escrito podrá desistir de la acusación y solicitar el sobreseimiento provisional de las actuaciones, si se estuviese en algunos de los casos del artículo seiscientos cuarenta y uno de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

A continuación, en un plazo igual, el inculcado o inculcados, formularán escritos de calificación acomodados a la estructura establecida para los que deduzca el Ministerio Fiscal. También podrán expresar su conformidad con la pena pedida.

F) La sentencia o el auto que se dicte se notificará al Ministerio Fiscal y al inculcado, pudiendo este o aquel, en el acto de la notificación o en el siguiente día, interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. La interposición del recurso se hará por escrito, y en el se razonarán sucintamente por el recurrente los motivos que lo autorizan como antecedente de las peticiones que se consignen en la súplica.

El Juzgado unirá a los autos el escrito interponiendo el recurso, y en el mismo día los remitirá a la Audiencia Provincial competente, con emplazamiento de las partes por término de cinco días. Dentro de este término, los recurridos podrán formular ante el Tribunal de apelación escrito razonado oponiéndose al recurso interpuesto.

G) Transcurrido el término del emplazamiento, se hayan o no personado las partes y formulado o no oposición, el Tribunal de apelación, previo examen de los autos y de los escritos que se hubiesen presentado, dictará sentencia en el plazo de tres días, confirmando o revocando la resolución recurrida.

Contra esta sentencia no se dará recurso alguno.

H) Cuando la sentencia fuese firme, se remitirá testimonio autorizado de la misma a la Fiscalía de Tasas por el Juzgado que hubiese dictado la de primera instancia, al tiempo de disponer lo necesario para el cumplimiento de las penas impuestas.

A los efectos del artículo séptimo de este Decreto-Ley las multas que como penalidad imponga la Autoridad judicial, se abonarán en efectivo metálico, y los Juzgados, dentro de las veinticuatro horas siguientes, efectuarán su ingreso en el Establecimiento correspondiente.

Artículo decimocuarto. - El Juzgado que conozca de los hechos en primera instancia legalizará la situación personal de los inculcados que estuviesen detenidos, en los plazos establecidos por la Ley.

Si se pronunciase el sobreseimiento o la absolución en primera instancia, el Juzgado podrá acordar la libertad provisional de los inculcados, con las garantías precisas para asegurar la efectividad de su comparecencia y la eventual revocación y condena. Esta resolución podrá reformarse por el Tribunal de apelación mientras el recurso se decide, bien de oficio o a solicitud del Ministerio Fiscal.

Todo lo relativo a la situación personal de los inculcados se actuará en pieza separada, con expresa referencia a los autos de que deriven.

Disposiciones Adicionales

Primera. - El presente Decreto Ley, del que se dará cuenta a las Cortes, comenzará a regir al siguiente día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y estará en vigor el tiempo que determine el Gobierno de la Nación.

Segunda. - Se autoriza al Ministro de Justicia para dictar las disposiciones aclaratorias y complementarias que exija su cumplida y correcta aplicación.

Así lo dispongo por el presente Decreto-Ley dado en el Pazo de Meirás a treinta de agosto de mil novecientos cuarenta y seis.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Justicia,
RAIMUNDO FERNÁNDEZ CUESTA
Y MERELÓ

Ayunfamientos

PALMA DEL RIO

Núm. 709

Extracto de acuerdos adoptados por la Comisión Gestora de este Ayuntamiento durante el mes de Julio de 1945, que forma el Secretario que suscribe en cumplimiento a lo preceptuado por la vigente Ley municipal.

Sesión ordinaria del día 5

Preside el Sr. Martínez Liñán, adoptándose los siguientes acuerdos:

Aprobar el acta de la sesión anterior

Hacer constar en acta el sentimiento de la Corporación por el fallecimiento de don Julio Muñoz Morales, y que se notifique el pésame a la familia.

Acceder a que la pensión que venía disfrutando doña Felisa Blanco Ruiz, viuda de don José Jiménez de la Cruz, Médico que fué titular de esta ciudad, la siga percibiendo, como huérfana del mismo, su hija doña Felisa Blanco Ruiz.

Conceder una mensualidad de anticipo a los empleados José Man-

zano Egea José Sánchez Expósito y Juan Valle Pérez.

Aprobar la cuenta del Agente en la capital correspondiente al 3.º trimestre del año en curso.

Dar de alta en Beneficencia a Eloy Romero Cáceres, Rafael León Domínguez, Agustín Yamuza de Gomar y Julián Martínez Boreas. Una pensión de lactancia solicitada a favor de Carmen Cabrera Rey, pase al turno correspondiente.

Aprobar la cuenta de medicamentos para la Beneficencia del Sr. Barrios Cortés, correspondiente al 2.º trimestre de este año, importante pesetas 3.984'40.

Aprobar el extracto de los acuerdos de Mayo y Junio últimos.

Aprobar el padrón del arbitrio sobre recogida de basuras para su exacción en el mes actual.

Sesión ordinaria del día 17

Preside el señor Martínez Liñán, y se adoptan los siguientes acuerdos:

Aprobar el acta de la sesión anterior.

Conceder quince días de licencia al Oficial 1.º don Juan Ruiz Rodríguez.

Dejar sobre la mesa la solicitud del concesionario del Llano de las Eras don José Paz y Remolar, instando liberación de la condición rescisoria a que se refiere la condición quinta del pliego de condiciones para las casas ya construidas.

Dejar sobre la mesa el escrito del Recaudador afianzado don Antonio Muñoz Aguilera, solicitando un plazo de seis meses como prórroga para presentar el papel fallido, encomendando a los señores Alcalde y Secretario sometan el caso a consulta.

Declarar el estado parcialmente ruinoso de la casa calle Calvo Sotelo 4, propiedad de don José Mayén Gelvez.

Aprobar el Padrón de ventanas voladizas, canalones y casa sin bajantes para 1945, y que se exponga al público por quince días.

De conformidad con el parecer del Letrado señor Mancebo, se autoriza a la Alcaldía, para otorgar poder al mismo a fin de personarse como coadyuvante en el recurso interpuesto por don Manuel Gamero Cívico contra resolución del Tribunal Económico Administrativo Provincial en reclamación formulada por el mismo contra acuerdo de la Junta General del Repartimiento sobre Utilidades de 1944, por la cuota que le fuera asignada en dicho Reparto.

A propuesta de la Delegación de Parques y Jardines, se acuerda sacar a concurso la plaza de jardinero Jefe de dicho servicio, que corresponde al turno de excombatientes, estableciendo el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios para dicho concurso.

Que se instruya expediente de corrección disciplinaria a dos Guardias municipales, en virtud de denuncia, nombrando Instructor al Gestor señor Gamero.

Aprobar la relación número 14, de jornales cuentas y facturas, formulada por Intervención por un importe total de pesetas 8.576'26.

SUBSIDIO AL COMBATIENTE

PROVINCIA DE CORDOBA

MES DE SEPTIEMBRE

Núm. 3.625

RESUMEN DE COMBATIENTES Y DE IMPORTE DE PADRONES

Núm. de Orden	AYUNTAMIENTOS	NÚM. DE SUBSIDIARIOS EN LOS PADRONES			IMPORTE MENSUAL DE PADRONES		
		Ordinarios	Adicionales	Totales	Ordinario	Adicionales	Totales
1	Aguilar	1		1	120		120
2	Baena	1		1	120		120
3	Cabra	1		1	90		90
4	Carcabuey	4		4	405		405
5	CORDOBA	12		12	1.440		1.440
6	Lucena	4		4	555		555
7	Nueva Carteya	2		2	285		285
8	Palma del Rio	1		1	60		60
9	Priego	5		5	660		660
10	Córdoba, adc., Julio...	4		4	540		540
	SUMAS TOTALES...	35		35	4.275		4.275

Don José M.ª Escribano Codina, Jefe de Contabilidad del Servicio de Subsidio al Combatiente de Córdoba. CERTIFICO: Que los datos que figuran en el presente estado resumen son fiel reflejo de los padrones y rectificaciones, remitidos por los Organismos locales para el mes actual. - El Jefe de Contabilidad, José M.ª Escribano Codina.

Córdoba 20 de Septiembre de 1946. - El Secretario, Melchor Osuna. - V.º B.º: El Jefe Provincial, Manuel Orri.

Declarar la duplicidad comprobada en la cuota de concierto extraordinario de los años 1942 a 1945, de Enrique Espejo Rosales y oficiar a la Agencia Ejecutiva la baja.

Otorgar una mensualidad de anticipo reintegrable a Manuel Gómez Gusano.

Otorgar un mes de licencia a don Manuel Martín Carmona.

Sin sujeción a turno se concede pensión de lactancia a María Guillén Fernández, para dos gemelos, pasando al turno correspondiente la solicitud a favor de Francisco Romero Almenara.

Se aprueba la relación número 17 de jornales, cuentas y facturas, formulada por Intervención, cuyo importe es de pesetas 7.404'64 pesetas.

Que se celebre la velada de Nuestra Excelsa Patrona la Virgen de Belén y asistir corporativamente a los actos religiosos con motivo de su fiesta.

Ceder íntegramente a la Diputación Provincial de Córdoba el derecho a construir el camino denominado de «Palma del Río a Guadalcázar por Fuente Palmera» y lo que resta por construir del nombrado «del puente sobre el Genil de la carretera de la Estación de Palma del Río a la de Madrid a Cádiz al pago de las huertas de la Graja con una bifurcación para el pago de Pedro Díaz», ratificando la cesión de los terrenos necesarios y solicitando el anticipo reglamentario.

Estimar la proposición de don Manuel Gamero Cívico, autorizando al Alcalde para que suscriba el documento público o privado que proceda con el Sr. Gamero Cívico, en que se concrete la transacción y, conforme al dictamen de letrados, desistirse del recurso interpuesto ante el Tribunal Provincial de lo Contencioso-administrativo, registrado bajo el núm. 2 de 1944, por el que se estimó la reclamación del Sr. Gamero Cívico, contra resolución de la Junta General del Repartimiento de 1942 y delegar en el señor Alcalde, para otorgar el oportuno poder a favor del Letrado señor Mancebo a fin de que opere el desestimiento citado presentando cuantos escritos sean necesarios y ratificándose o no en ellos, según proceda.

Sesión ordinaria del día 17

Preside el señor Martínez Liñán adoptándose los siguientes acuerdos:

Aprobar el acta de la sesión anterior.

Expresar la conformidad de esta Comisión Gestora con el acuerdo de la Hermandad de Labradores de esta ciudad sobre incompatibilidad con el Delegado Sindical y que se signifique la conveniencia de su relevo ante quien proceda.

Conceder el anticipo de una mensualidad al Guardia Antonio Díaz González y otra al ayudante del Sempulterero Antonio Pastor Camas.

Conceder una pensión de leche a la enferma María Martín Sánchez, fuera de turno.

Aprobar la relación de jornales, cuentas y facturas número 18, cuyo importe total es de pesetas 2.169'45, Palma del Río 29 de Septiembre de 1945.—El Secretario, Antonio Moreno.

***

Don Antonio Moreno Carmona, Secretario del Ilustre Ayuntamiento de esta ciudad.

Certifico: Que el precedente extracto de acuerdos ha sido aprobado por la Comisión Gestora de este Ilustre Ayuntamiento en el día de su fecha.

Y para su publicación en la forma que ordena la Ley municipal, expido la presente, visada por el Sr. Alcalde en Palma del Río a 17 de Octubre de 1945.—El Secretario, Antonio Moreno.—V.º B.º: El Alcalde, Angel Martínez Liñán.

JUZGADOS

SEVILLA

Núm. 3.610

Francisco Leal Aranda, hijo de Lázaro y de Carmen, natural de Hinojosa del Duque (Córdoba), de oficio albañil, de 21 años de edad, sabe leer y escribir, de estado soltero, estatura 1'594 metros, pelo castaño, cejas al pelo, ojos pardos, nariz recta, barba clara, boca regular color sano, frente ancha, y sin señas particulares, domiciliado últimamente en Hinojosa del Duque, sujeto a expediente por haber faltado a concentración a la Caja de Reclutas número 19 de Córdoba, para su destino a Cuerpo, comparecerá dentro del término de 30 días ante el Juez Instructor don Alfonso Chamorro Cascos, Comandante de Ingenieros con destino en el Regimiento de Zapadores número 2 (Sevilla), bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si no lo efectúa.

Sevilla 18 de Septiembre de 1946.—El Comandante Juez Instructor, Alfonso Chamorro.

CEUTA

Núm. 3.611

Alfonso Martínez Vázquez, musulmán, subdito español, natural de Fez (Marruecos Francés), de estado soltero, de profesión jornalero, domiciliado últimamente en Ceuta, caféin Moruno del Morro (Campo Exterior) sus señas: estatura baja, regordete, vestía, pantalón azul y camisa de Legionario, comparecerá en el plazo de quince días a partir de la inserción de la presente en el BOLETIN OFICIAL ante el Comandante Juez Instructor del Regimiento de Artillería de Costa de Marruecos don Felipe Risco Gómez de Ceuta, para responder de los cargos que le resultan en las diligencias previas número 1966, que se le instruyen por hurto, bajo apercibimiento que de no verificarlo será declarado rebelde.

Ceuta a 14 de Septiembre de 1946.—El Comandante Juez Instructor, Felipe Risco.

CORDOBA

Núm. 3.630

Cédula de citación

En providencia de ésta fecha, dictada por el Sr. Juez de Instrucción del distrito número 1 de esta Capital, en el sumario que se instruye con el número 78 de 1946, por muerte de Andrés Moreno Martín, natural de Ecija, hecho ocurrido en el Hospital de Agüdos, el día 3 de Marzo próximo pasado, ha mandado se cite por medio de la presente al pariente más próximo de dicho individuo, para que dentro del término de cinco días comparezca ante este Juzgado con el fin de recibirle declaración y ofrecer el sumario referido, con el apercibimiento de que si no lo verifica le parará el perjuicio a que haya lugar.

Córdoba 21 de Septiembre de 1946.—El Secretario, Rafael Moral.

Núm. 3.642

Don Ventura Arias Vivancos, Magistrado, Juez de Instrucción número 2 de esta Capital.

Por el presente y término de cinco días, cito y llamo a Longina Calkers Alcalá, Julia García Ramírez, Juan Alba Varo, Rafaela Franco Segura y Francisca Cubero Fernández, que en el año 1943 vivían en los corralones de los Rodríguez, de este término, y cuyo actual paradero se desconoce, a fin de que comparezcan en este Juzgado, sito calle Góngora sin número, para declarar y a la primera de ellos ofrecerle el sumario que se instruye con el número 215-946, por abusos deshonestos al niño Juan Calkers Alcalá; apercibidos en otro caso de pararles el perjuicio que proceda.

Dado en Córdoba a 21 de Septiembre de 1946.—Ventura Arias.—El Secretario, P. S. Juan de Sosa.

FUENTE OBEJUNA

Núm. 3.640

Don Jose María Luque Cuenda, Juez de Instrucción de Fuente Obejuna y su partido.

Por virtud del presente edicto que se insertará en el BOLETIN OFICIAL de esta provincia se interesa de toda clase de autoridades tanto civiles como militares y demás individuos de la Policía judicial, procedan a la busca y rescate de una burra, de diez años, raza española, de 1'14 metros de alzada, rucia apardada, con raya de mulo banda cruzada, sin otra cicatriz de un mosquero en la parte anterior del corvejón de la pata izquierda, sustraída de la Finca El Quintillo del término de Villanueva del Rey, en la noche del 5 al 6 del actual, propiedad del vecino de dicha población Pablo Sánchez Rodríguez, y caso de ser habida sea puesta a disposición de este Juzgado con la persona o personas en cuyo poder se encuentren si no acreditan su legítima adquisición.

Así lo he acordado en el sumario que instruyo con el número 271 de este año.

Dado en Fuente Obejuna a 20 de Septiembre de 1946.—José María Luque Cuenda.—El Secretario, José Sánchez.

Núm. 709

Extracto de acuerdos adoptados por la Comisión Gestora de este Ayuntamiento durante el mes de Septiembre de 1945, que forma el Secretario que suscribe en cumplimiento a lo preceptuado por la presente Ley Municipal.

Sesión ordinaria del día 3

Presidente el Sr. Martínez Liñán, adoptándose los siguientes acuerdos:

Aprobar el acta de la sesión anterior.

Aprobar la moción de la Alcaldía de memoria técnica relativa a las modificaciones introducidas en el proyecto de ensanche de la Avenida de Córdoba y pavimentación de la plaza y calles José Antonio y Calvo Cerrillo.

Aprobar igualmente el proyecto extraordinario de ensanche y pavimentación conforme al proyecto redactado por el Ingeniero Sr. Font Ribero y que se exponga al público por ocho días para que pueda ser examinado y formularse en dicho plazo y en los ocho días subsiguientes las reclamaciones que se presenten oportunas.

A propuesta del Tribunal nombrado al efecto, se nombra Jardinero del Servicio de Jardines al ex-combatiente José González Díaz, con el haber anual de 3.600 pesetas.

Quedar enterados del nombramiento de Médico de Asistencia Pública Domiciliaria del 3.º distrito de esta ciudad a favor de don José Jiménez Molina, y que se le de posesión del mismo.

Aprobar la cuenta de Beneficencia de la Sra. María Luisa de la Cruz, del mes de junio cuyo importe es de pesetas 263'97.

Aprobar la cuenta de caudales del trimestre de 1945.

Boletín Oficial del Estado

correspondiente al día 8 de Septiembre de 1946

AÑO XI

NUM. 251

Núm. 3.466

Gobierno de la Nación

MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

DECRETO de 9 de Agosto de 1946
por el que se aprueba, con carácter provisional el Reglamento General para el Régimen de la Minería.

(Continuación)

Será precisa la autorización de la Jefatura para abandonar las labores de servicio general o desmontar instalaciones cuya supresión pueda influir desfavorablemente en la marcha de la mina.

Art. 121. En las transmisiones «mortis causa» a favor de extranjeros, la Jefatura dará cuenta al Ministerio tan pronto tenga conocimiento de ella y éste, en término de treinta días, comunicará su conformidad con la transmisión o propondrá la subrogación de los derechos del adquirente por el Estado, previos los informes de la Jefatura de Minas, Instituto Geológico, Asesoría Jurídica, Consejo de Minería y organismos que estime oportuno oír.

En caso de subrogación de derechos se indemnizará al interesado con la valoración hecha de acuerdo entre la Jefatura del Distrito Minero y un representante de aquél, Ingeniero de Minas. En caso de desacuerdo, se incoará el expediente de expropiación forzosa.

Art. 122. La pertenencia minera es indivisible, cualquiera que sea la concesión de que forme parte.

Las concesiones que tengan superficie bastante podrán dividirse en varias, con la condición de que cada una de éstas contenga la suficiente para satisfacer el mínimo que corresponda al mineral objeto de aquélla. Cada una de las partes segregadas será objeto de un expediente, que se incoará a petición del concesionario, dando a las segregaciones nueva denominación y el número de la concesión de que proceda, con subíndices correlativos o anotación análoga; se continuará el expediente con la demarcación, previo el depósito correspondiente por parte de aquél, y se llegará a la expedición de nuevo título de concesión previos los trámites ordinarios, exceptuando las notificaciones a los colindantes y anuncios en los «Boletines Oficiales», innecesarios en estos casos.

En el título de la concesión objeto de segregación se harán constar por la Jefatura las pertenencias segregadas dando cuenta a la Delegación de Hacienda tanto de la reducción de la superficie de aquélla como de las nuevas concesiones derivadas de la segregación.

Entre concesiones contiguas, podrán hacerse ventas, cesiones o permutas de una o varias pertenencias

siempre que ambas continúen con superficie que satisfaga el mínimo correspondiente. La tramitación será la indicada en el caso de segregación incoándose dos nuevos expedientes y llegando a la expedición de dos nuevos títulos de concesión con anulación de los antiguos.

Si las concesiones que se dividen tuvieran alguna demasía, ésta quedará perteneciendo al grupo con que tenga contacto y si lo tuviere con varios el interesado designará aquél a que debe agregarse, previa conformidad de la Jefatura.

Art. 123. Todo titular de un permiso de investigación o concesionario de explotación está obligado a facilitar el desagüe y ventilación de las minas colindantes o próximas, permitiendo el paso de las correspondientes tuberías o canalizaciones así como galerías de circulación o transporte que no afecten esencialmente a la investigación o explotación.

Al efecto, el particular o empresa que pretenda la apertura de una galería de desagüe o transporte, o la instalación de una tubería de aire a través de pertenencias objeto de investigación o explotación, ya otorgadas o en tramitación, presentará en la Jefatura de Minas correspondiente al Distrito donde aquéllas estén enclavadas en su mayor parte o en totalidad, una solicitud acompañada de los planos de la obra proyectada, en los que se fijará la situación de las pertenencias que haya de atravesar y de una memoria explicativa del objeto de la petición. Acompañará igualmente los contratos o estipulaciones efectuados, con una copia de los mismos o comprobantes del intento de conciliación ante el organismo sindical correspondiente, en el caso de no haber sido posible llegar a un acuerdo.

La Jefatura de Minas, en término de quince días, previa confrontación del proyecto, le dará su aprobación o lo modificará en la forma que estime oportuna en defensa de las explotaciones en el caso de que se hubiera llegado al acuerdo o avenencia y en el mismo plazo notificará a los interesados aquéllas modificaciones entendiéndose, si no lo hace, que aprueba el proyecto presentado sin modificación alguna.

Si no hubiera habido acuerdo o avenencia, la Jefatura elevará el expediente con su informe, para que resuelva la Dirección General.

En el caso de que la obra debiera atravesar igualmente terreno franco y en él hubiera de otorgarse posteriormente algún permiso o concesión, se hará con la condición de respetar la obra efectuada.

Art. 124. Todo titular o poseedor legal de un permiso o concesión para explotar indemnizará, por convenio privado o por tasación de peritos, con sujeción a las Leyes comunes, cuantos daños y perjuicios ocasionare, y entre ellos, los producidos a otros permisos o concesiones, ya por acumulación de aguas en sus labores si, requerido, no las achicase en el plazo que se le fije;

por invasión de gases, intrusión de labores o de otro modo cualquiera por el que resultase menoscabo a intereses ajenos dentro o fuera de su permiso o concesión, y estará obligado a contribuir a los gastos que ocasione el desagüe que le afecte realizado por otra concesión colindante o próxima, en la que se acumulen las aguas procedentes de su investigación o explotación.

Art. 125. Cuando una o más minas desagüen a otra o a otras en todo o en parte, facilitando con ello la ejecución de labores o la extracción de minerales, procurarán concertarse privadamente en el modo de contribuir a los gastos que el desagüe ocasione con el tanto proporcional que de estos gastos corresponda a cada uno de ellos, y de no ser conseguido el concierto, el concesionario o concesionarios de las minas desaguadoras podrán solicitar de la correspondiente Jefatura de Minas que instruya el oportuno expediente que se tramitará con arreglo a las prescripciones siguientes:

1.ª El Ingeniero Jefe dispondrá, en cuanto reciba la solicitud, que se notifique a los concesionarios de las minas denunciadas para que, en el término de quince días, a contar de la fecha de la notificación, expongan cuanto a su derecho convenga, y ordenará que por el Ingeniero que designe se practiquen los estudios y trabajos que estime necesarios para decidir si procede o no la obligación del desagüe, fijando el plazo en que hayan de terminar esos estudios y trabajos, cuya duración determinará precisamente, en cada caso, el Ingeniero Jefe.

2.ª El Ingeniero Jefe resolverá sobre cada uno de los extremos en los ocho días siguientes a aquél en que haya emitido su informe el Ingeniero actuante, y, dispondrá que se notifique seguidamente la resolución a los interesados. De esta resolución podrán apelar ante el Ministro de Industria y Comercio, en los treinta días siguientes a la fecha de la notificación, los concesionarios que estimen lastimados sus derechos.

3.ª Resuelta por el Ministerio, oyendo al Consejo de Minería, la apelación en sentido de que no procede aquélla imposición para una o varias de las minas denunciadas, quedará fenecido el expediente en cuanto a las mismas y se continuará en lo relativo a las demás. De igual modo se procederá cuando la resolución ministerial afecte solo a alguno o algunos de los extremos comprendidos en la resolución de la Jefatura.

4.ª En cuanto se haya cumplido con lo prevenido en las prescripciones anteriores, se notificará a cada uno de los interesados en las minas desaguadas y desaguadoras para que en el plazo de ocho días a contar de la notificación nombren un perito y participen a la Jefatura a la vez que el nombramiento la aceptación del cargo por el que haya sido designado para desempeñarlo.

Estos peritos en unión de un tercero nombrado por la Jefatura en los

ocho días siguientes al de conocer los nombramientos hechos por los interesados, señalarán a cada una de aquéllas la indemnización que deba abonar a cada una de éstas en el caso de haberles producido daños la participación que les corresponda en los gastos de desagüe y la especificación de si su pago ha de ser en especie o en metálico. Al hacer estas evaluaciones tendrán en cuenta los beneficios que a los desaguadores produzca el aprovechamiento del agua extraída para abonarlos equitativamente a cada una de las minas que contribuyan al desagüe, o, en otro caso, se distribuirá en especie con análoga equidad el agua extraída.

Los peritos, que serán precisamente Ingenieros de Minas, entregarán sus informes a la Jefatura en el término de treinta días, a contar de la fecha de su aceptación.

Tan pronto como presenten los peritos su dictamen, la Jefatura de Minas pasará el expediente a informe del Abogado del Estado, quien lo emitirá en el plazo de quince días a partir de aquél en que reciba el expediente y seguidamente la Jefatura resolverá en los diez días siguientes sobre cada uno de los puntos comprendidos en los informes, notificando inmediatamente a los interesados su resolución. Los que no se conformen con este acuerdo podrán alzarse ante el Ministerio de Industria y Comercio en los treinta días siguientes al de la notificación.

5.ª Dictada la Orden ministerial que resuelva la alzada, se notificará a los interesados y será exigido inmediatamente el pago de las cantidades señaladas. Si transcurrieran dos meses desde la fecha de la notificación de la Orden ministerial sin haber sido hechas efectivas, se notificará de nuevo personalmente al demandador o a su representante, y si esto no fuese posible, se hará la notificación por medio del BOLETIN OFICIAL de la provincia, previniéndole que si en el improrrogable plazo de treinta días desde la fecha de la publicación no realizar el pago se considerará abandonada la mina, y la Jefatura lo comunicará a la Dirección General, a fin de que ésta pueda ordenar la incoación del expediente de caducidad.

6.ª Si en la zona desaguada estuviera comprendida alguna mina que no se trabajara, nada pagará mientras estuviera inactiva; pero desde el momento en que al trabajarse participare en la zona desecada, tendrá que contribuir con la cuota y demás gastos que le hubieran correspondido de haber tenido sus labores en actividad.

Las cantidades que pague reducirán en beneficio de las minas que sufragaron aquellos gastos, distribuyéndose entre ellas proporcionalmente el importe de sus respectivos desembolsos.

(Continuará)

IMP. PROVINCIAL.—CORDOBA